



"El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte": Ignacio Ellacuría

Editorial

2

Perspectivas sombrías para la izquierda

Político

4

El FDR, ¿opción para el cambio social?

Económico

7

La nueva alza en los precios del petróleo

Regional

9

Katrina: señal de alerta para la sociedad civil

Reporte IDHUCA

11

Fuerzas armadas, seguridad y derechos humanos

Documento

13

*Informe sobre Desarrollo Humano 2005:
La cooperación internacional ante una encrucijada*

Perspectivas sombrías para la izquierda

La izquierda salvadoreña no se agota en el FMLN, pero este partido es una de sus expresiones más importantes. Desde criterios puramente políticos, el FMLN ha sido, hasta ahora, el partido que ha aglutinado las ansias de quienes, en El Salvador, no están dispuestos a plegarse a los designios de la derecha y ARENA. Ha habido otras agrupaciones políticas que también se han querido situar a la izquierda del espectro político, pero han fracasado en el intento de convertirse en opciones políticas viables.

Las razones que explican ese fracaso son varias: sus líderes no pudieron demarcarse de su pasada trayectoria vinculada, directa o indirectamente, al FMLN; las propuestas que abanderaron no fueron convincentes para los sectores sociales a los que iban dirigidas; los nuevos proyectos políticos fueron vistos como una traición a los ideales por los que antes se luchó; fue difícil ver en esas propuestas algo más que un afán meramente electorero... A estos factores conviene añadir dos, de enorme relevancia: a) por lo general, las nuevas formaciones de izquierda no sólo surgieron del seno del FMLN, sino que se enfrascaron en una fuerte disputa con ese partido —disputa iniciada en los momentos de la ruptura, pero continuada con posterioridad a ella—, desgastando sus posibilidades de emerger y consolidarse como proyectos novedosos de izquierda; b) asimismo, en el marco de esa disputa, la estrategia que privilegiaron, para sobrevivir electoralmente, fue la de arrebatar votos al FMLN, lo cual condicionó, desde un principio, sus posibilidades reales de convertirse en protagonistas del sistema político. Fue una ingenuidad haber pensado que los votantes del FMLN eran unos votantes sin convicciones firmes, dispuestos a abandonar su partido por otro, cuyos dirigentes creían que lo único que bastaba para atraerlos era proclamarse como una nueva izquierda.

La principal debilidad de las formaciones de izquierda que han irrumpido en el escenario político de la postguerra radica en que han intentado, como estrategia básica de sobrevivencia político-electoral, arrebatarle votos al FMLN. No han buscado ser una opción más de izquierda, dispuestas a ocupar, junto con otras, un espacio político que ciertamente puede ser más amplio en términos de partidos y de electores, sino que pretendieron desplazar al FMLN, es decir, ocupar su lugar, quedándose con sus votos y con su cuota de poder. Como resultado de ello, sobrevino el fracaso político. Y, a tono con estas experiencias de fracaso, se impuso la tesis de que en El Salvador no había más espacio en la izquierda para otro partido que no fuera el FMLN y que cualquier formación política de izquierda —desmembrada o no del FMLN— estaba condenada a desaparecer.

Este razonamiento ha sido usado por muchos para interpretar la situación y perspectivas del Frente Democrático Revolucionario (FDR), el nuevo proyecto de izquierda que ha emergido de la más reciente crisis del FMLN. Para quienes no ven con buenos ojos su surgimiento del FDR, este partido en proceso de legalización no tendrá un futuro distinto al del PD y al del Movimiento Renovador.

Y no será de otro modo —dicen— porque se trata de un partido que, además de contar en sus filas con figuras que han traicionado la causa revolucionaria y que se han vendido a la derecha neoliberal, pretende —al igual que hicieron socialdemócratas y renovadores— hacerse de una parte del caudal electoral del FMLN, lo cual ha mostrado ser un propósito condenado al fracaso.

Es posible que esta lectura sea correcta. Sin embargo, es útil intentar otro tipo de análisis, aunque sea sólo por el afán de explorar otras formas de ver la dinámica de la izquierda salvadoreña. Para comenzar, hay que preguntarse por el carácter del FDR, es decir, por su identidad como proyecto político. Se trata, sin duda, de un partido de izquierda, pero no de una izquierda que adversa los principios fundamentales del FMLN. Para el FDR, lo que está en cuestión no es el proyecto efemelenista, sino la cúpula que lo dirige; es el rechazo a la cúpula del FMLN lo que ha llevado a cuadros importantes del partido a fraguar un nuevo proyecto político. Esta situación tiene aspectos novedosos, si se la compara con la que llevó a la formación, por ejemplo, del PD. Este último puso en tela de juicio el proyecto efemelenista; de hecho, quiso ser un proyecto destinado a reemplazarlo, lo cual explica en parte su fracaso. El FDR viene a ser una especie de intento por recuperar lo mejor del FMLN —por lo menos en la intención de quienes le quieren dar vida—, y que no puede expresarse por el férreo control ejercido sobre los militantes y mandos medios por la actual cúpula del partido.

En el FDR, pues, el asunto es bastante claro: el problema en el FMLN es la cúpula; es su intransigencia, su intolerancia y su ansia de control lo que ha obligado a muchos de sus cuadros —que no han renegado de sus ideales democrático-revolucionarios—, a buscar refugio en un proyecto en el cual los intereses de la cúpula no sean una camisa de fuerza para los militantes. Desde el FMLN, las cosas también son bastante claras: al FDR no sólo han ido a parar los ambiciosos y renegados, los que le hacen el juego a la derecha, sino que se trata de un proyecto político condenado a desaparecer.

Es claro que la lectura del FMLN es simplista y cómoda. Más aún, es peligrosa para sus perspectivas electorales, porque pierde de vista la posibilidad de que, al contrario de lo que sucedió con el PD y el Movimiento Renovador, el FDR sí logre arrebatarle un número significativo de votos en las próximas o en las siguientes elecciones. Obviamente, aceptar esta eventualidad supone aceptar que el malestar en torno a la forma cómo es conducido el partido —esgrimido por muchos de los que se han dejado el FMLN y se han integrado al FDR— puede haber llegado a la militancia, bases y simpatizantes del partido.

No se ven señales de que la cúpula efemelenista esté dispuesta a hacerse cargo, ni siquiera por mera prudencia, de una situación como la apuntada. Por tanto, no se ve cómo el FMLN pueda prepararse con realismo no sólo para ceder parte de su caudal electoral a otro partido de izquierda, sino para seguir siendo un actor político decisivo con un voto de izquierda dividido. Con un panorama como el esbozado, las perspectivas políticas de la izquierda —la que se aglutina en torno al FMLN y la que se sitúa fuera de él— son francamente sombrías.

El FDR, ¿opción para el cambio social?

La salida anunciada del alcalde capitalino Mario Rivas Zamora de las filas efemelenistas para incorporarse al recientemente creado Frente Democrático Revolucionario (FDR) y el anuncio de esta formación política para competir en las elecciones de marzo próximo, indican el surgimiento de una nueva opción electoral de izquierda. Sin embargo, el FDR tiene que efectuar una carrera contra el reloj, puesto que, en el lapso de unos pocos meses, tiene que cumplir con los requisitos para inscribirse en el registro electoral, activar su estructura organizativa y organizar su estrategia proselitista para el próximo año.

En pocas palabras, el FDR es un tanto hijo de la improvisación. Las circunstancias que obligaron a su formación fueron precipitadas: la búsqueda de “otra” alternativa de izquierda frente a un FMLN reacio al disenso interno.

Entre la izquierda que el país necesita y las izquierdas que el país tiene

La decisión de convertirse en un partido electoral ha sumido al FMLN —y quizás a la izquierda en su conjunto— en una crisis de identidad de la que no parece recuperarse. Por una parte, posee un patrimonio histórico valioso para el país. La otrora izquierda armada se convirtió en un actor decisivo para el comienzo de las transformaciones sociales y políticas que demandaba El Salvador durante décadas. Este país era un esperpento autoritario, con remedos de elecciones y con unos sectores dominantes de mentalidad excluyente.

Los acuerdos de paz que, en 1992, iniciaron la superación de un orden socio-económico y político autoritario por otro cuyo rumbo sigue siendo incierto, marcaron también una puesta en cuestión sobre qué debía ser la izquierda en las nuevas circunstancias del país. En realidad, el

FMLN no era ajeno a la situación global de la izquierda latinoamericana: visto que era imposible hacer la revolución, ¿qué quedaba? ¿Una izquierda de discurso radical y confrontativa con las élites de poder, al estilo de Hugo Chávez, u otra, concertadora con estas mismas élites, como la de Lula da Silva? ¿Una izquierda que manejara un discurso revolucionario a ultranza, aunque Guazapa era tan sólo un cerro pelado, u otra que, al querer adecuarse a los nuevos tiempos, mimetizaba conductas social-demócratas europeizantes, junto a discursos moderados de derecha?

Se ha hablado mucho sobre *la izquierda que el país necesita*. Para algunos, esta debería ser una izquierda ultramontana —la cual es, por cierto, presa fácil para que sus detractores la presenten como enemiga de la democracia—; para otros, una izquierda completamente inofensiva. Ciertamente, el país no necesita de esa “izquierda”, pero tampoco de la izquierda que pretende ser la guardiana de la razón histórica.

¿Cuál es la izquierda que necesita El Salvador? Una que recoja la parte positiva de las fuerzas comprometidas con la democratización de la sociedad. Pero también tiene que ser una izquierda que rompa con la herencia negativa de estas fuerzas: prácticas autoritarias en su seno, hegemonismo político y verticalismo.

Es necesario un retorno, o una construcción, de una izquierda ética, es decir, comprometida con las transformaciones sociales, pero también abierta al diálogo y democrática. Muchas veces estos dos puntos suelen ser contradictorios, porque quienes abogan por un énfasis en el compromiso con las mayorías, muchas veces se sienten dueños de la verdad y representantes de la voluntad popular. Por el otro lado, quienes insisten en la apertura

política, tienden a relativizar el compromiso social. Pero ni el mesianismo ni el oportunismo pueden ser alternativas viables.

Atavismos

Recuérdese un verdadero “parto de los montes”, perpetrado por una mezcla confusa de oportunismo y deseos de desmarcarse del FMLN: la ruptura de los dirigentes del ERP y la RN con el resto del FMLN, ruptura que trajo consigo la creación del Partido Demócrata (PD). El rompimiento se anunciaba como un golpe mortal a la antigua guerrilla. En una dudosa “movida audaz”, digna de mejores causas, los diputados del PD firmaron un pacto político con el entonces presidente Armando Calderón Sol, que significó la ruina de los escindidos.

Lo anterior resulta un episodio tragicómico, pero muy elocuente. Demuestra, por un lado, que en El Salvador la definición de una identidad de izquierda pasa por cómo definirse *frente* al FMLN. Por el otro, demuestra también que el FMLN arrastra una autopercepción basada en lo que fue durante la guerra. Al margen de lo que sea el FMLN como partido político, este también es un símbolo. Se ve a sí mismo como tal: como la fuerza política que hizo la guerra, como la “vanguardia” del pueblo salvadoreño. Fuera de sus filas, también se ve ese valor simbólico.

Constituir una fuerza de izquierda de otra índole pasa por contender frente a este valor simbólico. Un valor simbólico de igual naturaleza es el del FDR original. Transformado en Convergencia Democrática, sus denodados esfuerzos por diferenciarse de la ex guerrilla —de la cual se le acusaba de ser el brazo político—, terminaron en actuaciones erráticas.

En la dirigencia efemelenista, lo anterior crea cierta autosuficiencia. Las defecciones —aunque sean del calibre de los tres diputados que abandonaron sus filas

durante esta semana— son catalogadas como algo irrelevante.

El problema es que el futuro del país se juega en algo más concreto que en atavismos políticos. Por otro lado, las mismas siglas FDR indican una añoranza de lo que fue cierta izquierda diplomática e intelectual, la cual se vio arrinconada por el hecho de haber sido un partido de cuadros, no de masas. Pero el nuevo FDR no es el de Ungo y Zamora en los años ochenta.

La progresiva atomización de la izquierda

Toda construcción de una fuerza comprometida con el cambio social debe partir de una serie de premisas. En primer lugar, ¿qué cambio social? Hablar del “cambio social” sin definir su orientación es hablar en el vacío. Porque luego es muy fácil, o bien caer en discursos utopistas reñidos con la práctica política concreta, o bien caer en un cinismo disfrazado de pragmatismo. El FDR se plantea a sí mismo como una fuerza que pretende rescatar el ideario efemelenista. ¿Es ese ideario alcanzable desde una perspectiva electoral?

La segunda premisa consiste en algo muy evidente. Ninguna fuerza política, sea de izquierdas o de derechas, representa *per se* la voluntad popular siempre y en todo lugar. En una democracia representativa como la salvadoreña, no hay una representación directa de la voluntad popular, salvo —y eso, con mucha cautela— el día de las votaciones. De esto, se deriva algo más: ninguna fuerza política es dueña de la verdad absoluta.

Visto lo anterior, el FDR debe plantearse el gran problema que se le plantea a cualquier fuerza de izquierda: sus fines. Si sus fines son convertirse en una fuerza electoral solvente, sus problemas pasan por destronar al FMLN en las preferencias electorales, empresa que es, por lo demás, arriesgada. No sólo para el FDR mismo, y para la izquierda en general, sino también para la sociedad salvadoreña. Una izquierda

análisis político

atomizada sólo le hace el juego a la derecha. De nada sirve tener una derecha con el poder casi total y un conjunto de partidos de izquierda “zancudos”, como dicen en Nicaragua, capaces sólo de crearle pequeñas molestias.

Si los fines del FDR, por el contrario, están vinculados con un proyecto de cambios sociales definido por una visión de país y por una eticidad orientada hacia las mayorías, el factor electoral no tendría que ser más que un simple medio.

Este proyecto de cambios sociales está por definirse. Se ha diluido en puras generalidades, o en definiciones negativas (se está en contra, por ejemplo, de los Tratados de Libre Comercio, pero no se proponen soluciones realistas, es decir, no doctrinarias, ni simples consignas). Los cambios sociales pasan por la constitución de un proyecto de nación, incluyente y justo. Para construir un proyecto nacional, se necesita el diálogo y la construcción de consensos. Si se tiene un FMLN que considera “irrelevantes” las deserciones o que ve la creación de otras fuerzas de izquierda como bagatelas; si se tiene un FDR que, para el caso, reivindique el patrimonio ético del FMLN como el suyo —únicamente suyo—, no hay condiciones para un consenso en las izquierdas.

Perspectivas

Dado el escaso tiempo que queda para las elecciones del año entrante, el necesario proceso de organización a nivel nacional del FDR se ve como algo cuesta arriba. La candidata del FMLN a la alcaldía de San Salvador, Violeta Menjívar, desestimó la posible candidatura de su otrora compañera de partido, Ileana Rogel, por parte del nuevo instituto político de izquierda. En

palabras de Menjívar, la contienda electoral en la capital será entre dos personas: ella y Rodrigo Samayoa, candidato por el partido ARENA, el cual ya está echando mano de todos los recursos —sucios y limpios— para recuperar una comuna perdida desde hace ocho años.

Realmente hay razones para que Menjívar se muestre confiada. La capital se muestra como un bastión firme para el FMLN, según la conducta del electorado. Precisamente por eso mismo también se espera que la campaña de ARENA sea implacable. Hay que recordar la experiencia de la derrota electoral del FMLN en las presidenciales de 2004, para esperar todo tipo de maniobras por parte del partido oficial.

En ese sentido, el FMLN no puede quedarse dormido en sus laureles. Debe dejar de lado su autosuficiencia y pensar en términos más realistas. Es cierto que el FDR no es todavía una fuerza política capaz de desplazarlo en términos de aceptación por parte del electorado, pero también es cierto que la bancada efemelenista está perdiendo peso en la Asamblea Legislativa. Algunos analistas aseguran que, de seguir el ritmo de las deserciones de las filas efemelenistas, el FDR podría ocupar el rol que ostenta actualmente el PCN: una fuerza legislativa capaz de inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, en virtud de la inexistencia de una fracción con mayoría absoluta. El FDR tendrá el reto de emplear esta posibilidad para bien del país y no para saciar las ambiciones de políticos de baja estofa. Nuevamente se plantea la necesidad de crear una amplia alianza electoral, si realmente se quiere evitar una nueva derrota. La derecha parece estar lista. ¿Y la izquierda?

La nueva alza en los precios del petróleo

A inicios de la semana se difundió la noticia sobre un fuerte incremento en los precios de los combustibles. Para los próximos días se espera que los precios de la gasolina y el diesel incrementen alrededor de un 25%. De esta forma, el precio de la gasolina súper, regular y el diesel llegaría a 4.08, 3.99 y 3.01 dólares respectivamente. El alza se debe a los efectos del huracán Katrina en el golfo de México. El siniestro afectó una zona que es fundamental en la cotización de los precios del crudo y sus derivados en el mercado internacional. El impacto de la noticia fue tal, que durante la tarde del lunes de la presente semana, hubo un incremento en la demanda de combustible en algunas gasolineras del país. Muchos automovilistas se acercaron a las gasolineras para comprar el combustible a precios más bajos previendo el alza anunciada.

En los últimos días de la semana pasada, ya se había corrido la noticia de una posible alza en los precios de la gasolina y el diesel. Pero en esa oportunidad los incrementos que se esperaban no eran lo suficientemente altos para provocar de manera inmediata un aumento en la demanda de combustible en las gasolineras del país. Bajo ese contexto, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) previó un fuerte impacto en la economía. Raúl Melara, director ejecutivo de la institución, mencionó que “la tendencia de los precios será un duro golpe a los productos plásticos y fletes” y agregó que la mayoría de empresas ha reorientado su consumo y optimizado su operación. Pero destacó que con el alza esperada se podía hacer poco.

Los empresarios del transporte público de pasajeros mostraron su interés en aumentar el precio del pasaje. Específicamente, la directiva de la Coordinadora Nacional de Transporte (CNT) se reunió con el ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, para negociar un alza en el pasaje de los autobuses urbanos y departamentales. Rodrigo Contreras Teos, vocero de la CNT, expresó la necesidad del alza a 30 centavos

en el pasaje en la zona urbana y del 50% en los autobuses interdepartamentales. En esa oportunidad, el ministro de Obras Públicas no dio una respuesta a definitiva a la petición; únicamente dijo que tendría en consideración la moción presentada por los transportistas.

Seguidamente, y en respuesta a los malestares que comenzaban a evidenciarse en algunos sectores de la sociedad, el gobierno, a través del Ministerio de Economía, reveló que tomaría varias medidas para paliar el impacto en la economía como fruto de los incrementos de los precios del crudo. Las medidas anunciadas fueron: la creación de ejes preferenciales para la circulación de vehículos, una campaña de ahorro de combustible, la eliminación de los impuestos a la importación de autos que funcionan indistintamente con gasolina o gas, una modificación en la ley de hidrocarburos que permita la creación de expendios de gas y, finalmente, el envío de una comisión especial a Venezuela en busca de precios preferenciales.

Fruto del incremento de precios del combustible y ante la falta de una política gubernamental concreta, los directores de la Asociación Salvadoreña de Empresarios de Transporte y Carga (ASETCA) y la Asociación de Empresarios del Transporte de Pasajeros (ATP) han acordado viajar a Venezuela en busca de precios más baratos. Los directores de las gremiales buscan una entrevista con el presidente Hugo Chávez para exponer su necesidad de adquirir el diésel a un costo más bajo. Ricardo Vanegas, presidente de ASETCA, declaró: “tomamos la batuta en esto porque creemos que es factible obtener el producto, y vamos hacer el intento”. Para esta semana se tiene prácticamente confirmado el viaje de los directores de las gremiales. De obtener, por su cuenta, precios preferenciales, pondrían en evidencia la falta de iniciativa del gobierno para negociar con el país sudamericano y la verdadera existencia de precios preferenciales en dicho país.

¿Por qué hasta ahora?

Es importante destacar el reciente interés gubernamental por la posible existencia de precios preferenciales en Venezuela. Esto, después de que muchas veces la ministra de Economía, Yolanda de Gavidia, expresara que no existían precios preferenciales del petróleo en el país sudamericano. Desde mediados del año, la población salvadoreña pidió al gobierno que realizará todos los esfuerzos para paliar el alza de precios en los combustibles. En esa oportunidad, el FMLN manifestó como alternativa buscar mejores precios en Venezuela a través de una entrevista con el presidente Hugo Chávez.

En la misma dirección, el director de la Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Petróleo (ASPP), Julio Villagrán, manifestó la posibilidad de encontrar mejores precios en en aquel país. Ante las sugerencias del FMLN y la ASDPP, el gobierno se mostró indiferente y evitó un acercamiento a Venezuela. En esa oportunidad, en el ambiente económico y político se mantuvo la idea de que dicho acercamiento no sería posible debido a las diferencias existentes entre el gobierno de El Salvador y Venezuela en cuanto a la política internacional y sus respectivas relaciones con los Estados Unidos.

En la actualidad, el gobierno ha mostrado interés por acercarse a aquel país debido a que los empresarios de la ANEP se encuentran preocupados por el alza en los precios de la gasolina y diésel. Parece ser que el gobierno salvadoreño reaccionó exclusivamente ante las necesidades de los gremios empresariales. Todos los llamados a la búsqueda de mejores precios en Venezuela provenientes de otras entidades fueron desestimados en su momento. Bastó que el sector empresarial pidiera auxilio para que el gobierno reaccionara en su ayuda.

Un alza en detrimento de los salarios reales

El incremento en los precios de la gasolina y el diésel se encuentra afectando el bolsillo de los salvadoreños. De suceder el incremento esperado, las personas que se

transportan a través de autobuses y microbuses tendrían la posibilidad de verse afectados por el incremento del pasaje. De igual manera, quienes se conducen en vehículo propio tendrían que destinar una mayor cantidad de dinero para el abastecimiento de combustible. Esto es sólo una dimensión del problema. También pudiera suceder un incremento en los precios de los bienes que se venden en el mercado local. Esto se debería a que las empresas comerciantes estarían pagando un mayor costo de transporte (flete) por los productos que ofrecen en el mercado.

En este sentido, el economista Carlos Acevedo mencionó que “no me extrañaría que si estos precios se mantienen suba unos dos puntos la inflación”, haciendo referencia al incremento de precios en los combustibles. En los últimos años, el bolsillo de los salvadoreños se ha visto seriamente afectados por alzas en el precio de pasaje, aumento de la presión fiscal fruto de la reforma fiscal, incremento en las tarifas de energía eléctrica y en el costo de los granos básicos. El alza en los precios de los combustibles tiene efectos permisivos para la sociedad salvadoreña y es necesario que el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil trabajen para concretar una política que pueda hacer frente al problema.

Los momentos de crisis económica permiten efectuar una racionalización económica del consumo. Es una oportunidad para realizar una reasignación de recursos de tal manera que el gasto se vuelva más eficiente. En esta situación, la austeridad juega un papel importante y el nivel de ésta se encuentra determinado por el nivel de ingreso inicial que tiene una persona, familia o empresa previo a la crisis y el incremento en los precios de los bienes que se consumen comúnmente. El análisis del transporte es un caso particular, este servicio tiende a comportarse como bien complementario. El transporte se utiliza para asistir al trabajo, estudio, hospital, entre otros. Finalmente, lo importante es priorizar el consumo en bienes y servicios básicos, aquellos necesarios para la alimentación, la educación y la salud.

Katrina: señal de alerta para la sociedad civil

El 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina entró a Estados Unidos golpeando a los estados sureños de Lousiana, Missisipi y Alabama. En pocas horas causó destrucción, inundaciones y caos. De acuerdo a la organización Soluciones para la Gestión de Riesgo, los costos de los daños materiales podrían alcanzar niveles récord arriba de los 100 mil millones de dólares, con consecuencias impredecibles para la economía norteamericana. Aún no se logra establecer el número de fallecidos, pero oficialmente se estima que el número anda entre los 10,000 y 50,000, basándose en el porcentaje estimado de habitantes que no lograron evacuar la ciudad de Nueva Orleans; es decir, de un 5 a 10 por ciento. Por otra parte, se estima, oficialmente, que el número de desplazados es de un millón de personas, sin trabajo, sin dinero, y sin perspectivas claras sobre su futuro. Dentro de todo, este último grupo es el que corrió con la mejor suerte, ya que, hasta donde sus posibilidades económicas lo permitieron, lograron evacuar las ciudades afectadas. Los rescates y el éxodo de miles de personas continúan, muchos otros siguen muriendo por hambre o enfermedades.

Los saqueos, disparos y violaciones que caracterizaron los primeros días de supervivencia de las víctimas de Katrina asombraron a muchos espectadores más que los daños, y es que quedó al descubierto que el tan anhelado “sueño americano” no sólo no existe para una gran cantidad de personas, sino que su imitación es insostenible y ha degradado la moral del ser humano.

Por si todo esto pareciera ajeno a nuestra realidad, valga la mención que la economía centroamericana no logró escapar de Katrina. Su impacto se hará sentir fuertemente, de acuerdo a lo vaticinado por el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) Harry Brautigam.

Más allá de “lo natural”

La catástrofe, documentada en imágenes que han dado la vuelta al mundo entero, dejó al descubierto un escenario que de

entenderse en su justa medida puede funcionar como una señal de alerta para la sociedad civil. Así, se hacen necesarios dos cuestionamientos: qué tan “natural” fue el desastre y si las “libres fuerzas del mercado” actuaron en favor del bienestar social a la hora de prevenir el impacto y superarlo.

Aunque el presidente George Bush ha denominado a Katrina “el peor desastre natural de la historia”, cada día se hace más evidente que lo ocurrido pudo prevenirse. La información incluso se hizo pública, a través de medios de comunicación masiva, años antes que esta catástrofe anunciada se materializara. Fue en el 2001 que la Oficina Federal de Emergencias (FEMA) advirtió que entre los desastres previsible para Estados Unidos estaban: una catastrófica inundación causada por un huracán sobre Nueva Orleans, un ataque terrorista en Nueva York y un terremoto de grandes proporciones en San Francisco.

En 2002, varios artículos publicados en el periódico *Times-Picayune* de Nueva Orleans informaron en detalle la posibilidad de que, en el caso de pasar un huracán, se rompiera uno de los diques que contienen el agua del Lago Pontchartrain que rodea la ciudad. Aún así, se suspendieron los trabajos de refuerzo de esas estructuras por “recorte de presupuesto”. Asimismo, la FEMA fue diezmada y absorbida por el Departamento de Seguridad Interna (DHS). Lo que se esperaba pasó, y peor aún: miles de habitantes sobrevivieron el impacto del huracán, con vientos que superaron los 240 kilómetros por hora, pero por la falta de asistencia del gobierno durante las cruciales primeras horas del desastre, muchos de ellos se ahogaron a medida las aguas crecían. La atención médica tampoco llegó a tiempo.

Cabe mencionar que Bush ganó la reelección de 2004 en Lousiana, Missisipi y Alabama, con un 57%, 60% y 63% de los votos, respectivamente. ¿Será que ve a sus electores solamente como un medio para llevar a cabo sus proyectos corporativos y bélicos, o que estaba plenamente convencido que “las libres fuerzas del mercado” tomarían

las riendas de la situación? En todo caso, en su discurso de toma posesión de 2004, Bush expresó lo siguiente: “en el ideal de libertad de los Estados Unidos, los ciudadanos encuentran la dignidad y seguridad de la independencia económica, (...). En el ideal de libertad de los Estados Unidos, el interés público depende del carácter privado”. Emotivas frases que responden a un axioma del neoliberalismo, teoría que, en su pretensión científica, propone, “la libertad absoluta del mercado es el método más eficiente para promover el bienestar de la sociedad”. Los hechos hablan por sí mismos: el neoliberalismo no es más que una ideología al servicio de los intereses de unos pocos. La “responsabilidad social empresarial” no funcionó a la hora de enfrentar un Katrina. El presupuesto para el año fiscal 2004-2005 redujo drásticamente los fondos para educación, salud pública y protección del medio ambiente. Según organizaciones de la sociedad civil que componen el Día de Acción Nacional por Servicios Médicos para Todos, 18 mil personas en EEUU murieron el 2003 por falta de cuidado médico. Las cifras ya daban señales de alerta. Katrina lo enfatizó de forma dramática.

La catástrofe que dejó tras sí Katrina no sólo fue anunciada, sino que sus magnitudes responden consecuentemente a las decisiones y políticas gubernamentales orientadas a favorecer la “América Corporativa” a costa de la reducción del presupuesto destinado a cuidar el área social. A las autoridades salvadoreñas les corresponde hacer una seria reflexión acerca de las implicaciones a corto y mediano que Katrina tendrá en nuestra dependiente y frágil economía. Esas implicaciones no serán “naturales” tampoco, sino producto de decisiones gubernamentales, especialmente las tomadas durante el periodo presidencial de Francisco Flores, quien, sin consulta nacional, condujo al país a la renuncia de toda política monetaria, absorbiendo, o más bien dejándonos absorber por el dólar americano. El actual presidente Antonio Saca, heredó y asumió dicha agenda, haciendo prevalecer los temas que interesan a Estados

Unidos: el CAFTA–RD, permanencia de tropas salvadoreñas en Irak y la “Súper Mano Dura”. Si las consecuencias económicas posteriores al desastre son aún impredecibles para la economía de Estados Unidos, no hay duda que repercutirá en la nuestra. La alerta de “emergencia nacional” dada por el Ministro de Economía ante la especulación del incremento de los precios de la gasolina post-Katrina, sin proponer más alternativas que “ahorren combustible”, es sólo una muestra de la falta de previsión nacional ante las coyunturas internacionales o, ¿es que también aquí se sirve a un “El Salvador Corporativo”?

La responsabilidad de la sociedad civil

Una sociedad civil fuerte, cohesionada, racional es clave a la hora de determinar el rumbo de una nación en proceso de democratización. Se debe aspirar a una democracia además de participativa, deliberativa, tal como lo propone Jürgen Habermas, en donde la reflexión entre afectados a través de un acuerdo comunicativo lleve a la luz pública las razones para la constitución del orden jurídico y la toma de decisiones políticas. La sociedad civil no puede seguir basando sus acciones políticas en sus emociones. Un discurso “emotivo” de un líder que aspira al poder no determina su carácter y compromiso social. La evaluación por parte de la sociedad civil debe ser más profunda, racional.

La responsabilidad de la sociedad civil es asumir su papel de sujeto histórico. Para ello se necesita mucho trabajo y disciplina, menos “shopping” y menos entretenimiento superfluo. Dejarle la tarea a “las fuerzas del mercado” es mucho más cómodo, pero es peligroso para la supervivencia de las sociedades, tal como lo deja entrever Katrina.

Entonces, ¿qué debe hacer la sociedad civil ante esta llamada de alerta? Despertar políticamente. Un distanciamiento de los temas políticos puede tener serias repercusiones en los destinos de las naciones. En todo caso, la política es ineludible, sus efectos los sentimos en nuestra vida cotidiana. Más vale aceptar y asumir la responsabilidad histórica como sociedad.

Fuerzas armadas, seguridad y derechos humanos

Hace unas semanas se realizó en Managua, Nicaragua, un seminario regional con el título que encabeza este comentario. Organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), el evento pretendía profundizar diversos temas vinculados a la relación existente entre la milicia y los derechos humanos en Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Oficiales castrenses de los cuatro países junto a miembros de organizaciones sociales de derechos humanos, reflexionaron sobre dos temas: los retos de la seguridad ciudadana y el papel de las tropas en el marco de las operaciones de paz. Parte del esfuerzo de las y los asistentes se dedicó a discutir problemas de enorme actualidad; así, por ejemplo, se debatió con especial énfasis acerca del crimen organizado, el terrorismo y la modernización de los ejércitos.

En ese marco, se abordó un tema candente de actualidad: la seguridad ciudadana; esto supuso, necesariamente, referirse a la débil institucionalidad regional para garantizarla. Entre las carencias de la administración pública al respecto destaca lo siguiente: agentes con escasa preparación en materia de inteligencia policial, deficiente investigación del delito e inadecuado manejo de los escenarios del crimen. A esas fallas debe agregarse el cuestionado funcionamiento fiscal en lo relativo, por ejemplo, a la persecución del delito. En el caso salvadoreño la situación es más grave, cuando se reproducen vicios heredados de los cuerpos policiales extintos tras el fin de la guerra.

Si los Estados cuentan con lánguidos mecanismos para enfrentar la violencia y el crimen organizado, la tentación de recurrir a la fuerza es grande y casi siempre aparece ésta como la “solución”. Este fue uno de los asuntos más debatidos en el referido seminario regional, pues los gobiernos utilizan las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública cuando esa función nada tiene que ver con su razón de ser y sus miembros no están preparados para ejercerla. De ahí una importante conclusión: militarizar la acción

policial no se traduce en un combate eficaz de la delincuencia ni en una reducción sustantiva los niveles de violencia y, mucho menos, en garantía de seguridad pública.

Para demostrar lo inadecuado de ese planteamiento baste recordar el papel que veinte o treinta años atrás desempeñaron estas instituciones en los cuatro países mencionados. Con el pretexto de enfrentar situaciones de emergencia y defender el orden establecido, cientos de miles de personas fueron víctimas de las peores violaciones a sus derechos humanos; violaciones ordenadas por militares y ejecutadas por policías, o decididas y cumplidas por efectivos castrenses sin que asumieran legal y moralmente su responsabilidad. ¿Es que acaso hoy, con el argumento del combate a la delincuencia, existe la posibilidad que se repitan hechos semejantes?

Pero, además, existen razones técnicas y funcionales para rechazar semejante postura. Los cuerpos policiales son los únicos autorizados para ejercer, legal y proporcionalmente, la fuerza coercitiva estatal; eso significa que están diseñados para detener a quienes violen la ley a través de un proceso respetuoso de los derechos fundamentales. En cambio, las fuerzas militares están entrenadas para un uso total de la fuerza; representan, entonces, la excepción y no la regla. Además, desde la perspectiva de la seguridad interna no poseen formación jurídica alguna y sus miembros manejan la lógica de aniquilar o destruir al enemigo.

En los acuerdos que pusieron fin a la guerra quedó establecida esa separación de funciones; sin embargo, esto no se cumplió a cabalidad y así la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) continúa desempeñando funciones que no le corresponden. Hoy la institución demanda, entonces, más recursos para mantener sus efectivos que participan en los llamados “grupos de tarea conjunta” o “antidelincuenciales”.

En definitiva, el círculo vicioso no terminará mientras no se tengan claras la diferencia que

reporte IDHUCA

la misma Constitución de la República establece en su artículo 159. inciso 2, cuando dice: “La Defensa Nacional y la Seguridad Pública estarán adscritas a Ministerios diferentes. La Seguridad Pública estará a cargo de la Policía Nacional Civil, que será un cuerpo profesional, independiente de la Fuerza Armada y ajena a toda actividad partidista”.

Si bien es cierto que el Presidente de la República puede disponer de la milicia, esa potestad es excepcional tras haber agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública. Lo que se observa en la realidad es una inadecuada interpretación de esa salvedad, al convertirla en regla.

Algunos ejemplos de lo anterior durante los últimos dieciséis años: el plan “Grano de oro” para proteger los cultivos de café; el “Caminante”, también para patrullar en el campo; la Ley transitoria de emergencia contra la delincuencia y el crimen organizado; la Ley antimaras y el Plan “Mano dura” de Francisco Flores; y el “Súper mano dura” de su sucesor. La semana pasada se inició otra fase de este último, con la pretensión de crear equipos integrados por dos policías, tres miembros militares y un estudiante de la Academia Nacional de Seguridad Pública para prevenir la violencia en los lugares clasificados como peligrosos. Lo anterior muestra la incapacidad policial tolerada por el Ejecutivo, que además permite la sistemática y sostenida usurpación de funciones por parte de la FAES.

Todo eso distorsiona e interrumpe los procesos de transformación militar que en Guatemala y El Salvador pretendieron iniciarse tras los conflictos respectivos. Dichas reformas implicaban adoptar nuevos planes educativos con un alto componente de derechos humanos, delimitar funciones con una clara subordinación al poder civil y construir un marco jurídico sometido al ordenamiento constitucional vigente. Con esto se creyó asegurar la profesionalización de sus miembros. Pero al evaluar el proceso salvadoreño, resulta evidente la mala conducción política de los sucesivos gobiernos de la posguerra; estos son, a fin de cuentas, responsables de la ineptitud

policial y de la distorsión de reglas democráticas al delegar tareas que no le corresponden a los militares.

Por otro lado, pretenden justificar la participación de la FAES en las llamadas misiones de paz en el extranjero apelando a la lucha contra el terrorismo y la identificación de nuevas amenazas como el auge del “narcoterrorismo”, el trasiego de armas y el tráfico de personas en los países de la región. La conveniencia o no de estas misiones debería ser objeto de discusión nacional, sobre todo cuando El Salvador es el único país latinoamericano con tropas en la invasión estadounidense a Irak, donde ya murieron dos compatriotas.

Además de revisar las nuevas funciones militares, tal como se planteó en el seminario de Managua, en la región debe honrarse su memoria y la de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos en el pasado reciente; deben hacer un riguroso examen de conciencia, para que luego las instituciones castrenses pidan perdón por su responsabilidad en tales hechos.

El general Otto Romero, Ministro de la Defensa Nacional salvadoreño afirmó hace unos días lo siguiente: “Nosotros tuvimos un proceso de paz exitoso, y enfrentamos nuestro pasado y nuestro futuro también. Somos en realidad cumplidores excelentes de los Acuerdos de Paz, y con ello está claro que hemos enfrentado el pasado”. Punto; no hay más que hablar. Lo dijo durante la ceremonia en la que condecoró a Juan Emilio Cheyre, Comandante en Jefe del Ejército de Chile, también acusado de graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura “pinochetista”; éste oficial dictó una conferencia en la que, a diferencia de la postura de su colega salvadoreño, dijo tajante: “El pasado se enfrenta y lo vamos a enfrentar todos”.

Reconocer el doloroso pasado imputable a las fuerzas armadas es un medio único para conciliar a éstas con las sociedades a las que pertenecen; además, de concretar esa necesaria expiación, estarían contribuyendo al fortalecimiento de la democracia en los países de la región. Pero en El Salvador, la resistencia es enorme como enorme es también el sufrimiento de las víctimas de la impunidad.

A continuación presentamos un fragmento del *Informe sobre Desarrollo Humano 2005*, divulgado el pasado 7 de septiembre por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La cooperación internacional ante una encrucijada: *Ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo desigual*

El año 2004 finalizó con un acontecimiento que demostró tanto el poder destructivo de la naturaleza como el poder regenerador de la compasión humana. El tsunami que azotó el Océano Índico cobró más de 300.000 vidas y dejó a millones de personas sin hogar. Pocos días después, el peor desastre natural de la historia reciente daba lugar al mayor esfuerzo internacional de socorro conocido, demostrando lo que puede lograr la solidaridad mundial cuando la comunidad internacional se consagra a un gran empeño.

El tsunami fue una tragedia altamente visible, impredecible y, en gran medida, inevitable. Existen otras tragedias menos notorias, fáciles de evitar y predecibles por su exasperante regularidad. Cada hora que pasa y sin acaparar la atención de los medios, mueren más de 1.200 niños. Esto equivale a tres tsunamis mensuales, todos los meses, que alcanzan a los ciudadanos más vulnerables del mundo: los niños. Las causas de muerte varían, pero la abrumadora mayoría se debe a una única patología: la pobreza. A diferencia del tsunami, esta patología se puede prevenir. Con la actual tecnología, recursos financieros y acumulación de conocimientos, el mundo tiene la capacidad de superar la pobreza extrema. Sin embargo, como comunidad internacional permitimos que la pobreza destruya la vida a una escala que por su envergadura eclipsa el impacto del tsunami.

Cinco años atrás, al comienzo del nuevo milenio, los gobiernos del mundo se unieron para hacer una extraordinaria promesa a las víctimas de la pobreza mundial. En las

Naciones Unidas, firmaron la Declaración del Milenio, un compromiso solemne “para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema”. La Declaración representa una visión enérgica que tiene su origen en un compromiso compartido con los derechos humanos universales y la justicia social y, a la vez, está respaldada por metas claras y definidas. Éstas, conocidas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), incluyen reducir a la mitad la pobreza extrema, reducir la cantidad de muertes infantiles, proveer educación a todos los niños y niñas del mundo, reducir la cantidad de enfermedades infecciosas y forjar una nueva alianza mundial para obtener resultados. El plazo fijado para cumplir estos objetivos es el año 2015.

El desarrollo humano abarca mucho más que los ODM, pero éstos constituyen un referente crucial para medir el progreso hacia la creación de un nuevo orden mundial más justo, menos empobrecido e inseguro. En septiembre de 2005, los gobiernos del mundo se volverán a reunir en las Naciones Unidas para revisar los avances conseguidos desde que firmaran la Declaración del Milenio y redefinir el curso para el decenio que resta hasta 2015. No hay grandes motivos para celebrar, si bien se han conseguido algunos progresos importantes en desarrollo humano desde la firma de la Declaración del Milenio. La pobreza ha disminuido y los indicadores sociales han mejorado. Los ODM han sido

un punto de convergencia de la preocupación internacional, en la medida en que han puesto el tema del desarrollo y la lucha contra la pobreza en la agenda de un modo que, un decenio atrás, habría sido inimaginable. El año 2005 está marcado por una campaña mundial sin precedentes destinada a dejar la pobreza en el pasado, campaña que ya dejó su impronta en términos de los avances en materia de ayuda y alivio de la deuda registrados en la cumbre del Grupo de los Ocho (G-8), donde se dieron cita las principales economías industrializadas del mundo. ¿Cuáles fueron las enseñanzas recogidas? La fuerza de los argumentos respaldados por la movilización pública puede cambiar el mundo. Así todo, mientras los gobiernos se preparan para la cumbre de la ONU 2005, el informe general de avances es deprimente. La mayoría de los países están mal encaminados para cumplir la mayor parte de los ODM. El desarrollo humano está tambaleando en algunas áreas cruciales y las desigualdades que ya eran profundas siguen aumentando.

Muchos discursos diplomáticos y términos corteses intentan dar cuenta de la diferencia entre el progreso en desarrollo humano y la ambición plasmada en la Declaración del Milenio; sin embargo, ninguno de ellos debería empañar una verdad muy simple: no se está cumpliendo la promesa hecha a los pobres del mundo. Este año 2005 marca una encrucijada. Los gobiernos del mundo enfrentan distintas alternativas.

Una de ellas es aprovechar la oportunidad y transformar el año 2005 en el inicio del “decenio a favor del desarrollo”. Si se realizan hoy las inversiones y se ponen en marcha las políticas necesarias para alcanzar los ODM, aún se está a tiempo de cumplir la promesa de la Declaración del Milenio. Pero queda poco tiempo. La cumbre de la ONU constituye la oportunidad de adoptar los planes de acción decisivos que son necesarios no sólo para volver a encaminarse hacia el cumplimiento de los

objetivos al 2015, sino también para terminar con las profundas desigualdades que dividen a la humanidad y forjar un nuevo patrón de globalización más justo.

La otra alternativa es continuar con la rutina y hacer de 2005 el año en que se habrá faltado a la promesa de la Declaración del Milenio. De optar por ello, esta generación de líderes mundiales pasará a la historia como quienes permitieron que fracasaran los ODM. En vez de comprometerse con acciones, la cumbre de la ONU podría dar lugar a otra ronda más de rimbombantes declaraciones por parte de los países ricos cuya oferta constaría de aún más palabras y ninguna acción. Un resultado como éste tendría claras consecuencias para los pobres, pero en un mundo de amenazas y oportunidades cada vez más interconectadas, ello también pondría en peligro la seguridad, la paz y la prosperidad mundial.

La cumbre de 2005 constituye una oportunidad crítica para los gobiernos que firmaron la Declaración del Milenio de mostrar que se pondrán manos a la obra y de que son capaces de romper con la rutina. Esta es la ocasión de probar que la Declaración del Milenio no es sólo una promesa no cumplida, sino un compromiso real con el cambio. La cumbre es también la oportunidad de movilizar los recursos para inversión y poner en marcha los planes necesarios para construir las defensas capaces de detener el tsunami de la pobreza mundial. Lo que se requiere es voluntad política para actuar conforme al compromiso asumido hace cinco años

El Informe sobre Desarrollo Humano 2005

El Informe de este año trata de la envergadura del desafío que enfrenta el mundo al inicio de la cuenta regresiva de 10 años hasta 2015 y se concentra en lo que los gobiernos de los países ricos pueden hacer para cumplir la parte que les corresponde en la alianza mundial para el desarrollo. Esto no significa que a los

gobiernos de los países en desarrollo no les quepa responsabilidad en el asunto. Por el contrario, tienen una gran responsabilidad. No hay cooperación internacional que pueda compensar aquellas acciones que los gobiernos dejan de hacer por no priorizar el desarrollo humano, no respetar los derechos humanos, no hacerse cargo de las desigualdades y no poner fin a la corrupción. Pero sin un nuevo compromiso de cooperación respaldado por acciones prácticas y concretas, los ODM no se cumplirán y la Declaración del Milenio pasará a la historia como una promesa incumplida más.

Nos centramos en tres pilares de la cooperación, los cuales requieren ser renovados con urgencia. El primero es la asistencia para el desarrollo. La ayuda internacional constituye una inversión fundamental en desarrollo humano y su rentabilidad puede medirse por el potencial humano que resulta de la prevención de enfermedades y muertes evitables, la educación para todos los niños y niñas del mundo, la superación de las desigualdades de género y la creación de condiciones para conseguir crecimiento económico sostenido.

La asistencia para el desarrollo se caracteriza por dos carencias: déficit crónico de financiamiento y mala calidad; y si bien hubo mejoras en ambos frentes, aún queda mucho por hacer para cerrar la brecha de financiación de los ODM y mejorar la relación calidad-precio.

El segundo pilar es el comercio internacional. En circunstancias favorables, el comercio puede ser un poderoso catalizador del desarrollo humano. La "Ronda del Desarrollo" de Doha, lanzada en 2001 en el marco de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), fue una oportunidad para que los gobiernos de los países ricos generaran estas circunstancias. Durante los cuatro años transcurridos desde aquella fecha, no se ha logrado nada sustancial. Las políticas comerciales de los países ricos siguen negándole a los países y a las personas

pobres una participación justa en la prosperidad global, situación que hace caso omiso a la Declaración del Milenio. Más que lo que puede lograr la ayuda internacional, el comercio tiene el potencial de aumentar la participación de los países y de la población más pobre del mundo en la prosperidad mundial. Restringir ese potencial a través de políticas comerciales injustas no es coherente con el compromiso asumido en los ODM y más aún, resulta injusto e hipócrita.

El tercer pilar es la seguridad. Los conflictos armados arruinan la vida de millones de personas, constituyen una fuente de violación sistemática de los derechos humanos y obstaculizan el avance hacia el cumplimiento de los ODM. La naturaleza de los conflictos ha cambiado y han surgido nuevas amenazas a la seguridad colectiva. En un mundo cada vez más interconectado, los peligros que plantea la incapacidad de prevenir estos conflictos, o de aprovechar las oportunidades para instaurar la paz, trascienden inevitablemente de las fronteras nacionales. La cooperación internacional más eficiente podría contribuir a eliminar los obstáculos que representan los conflictos armados para el avance hacia los ODM y así crear condiciones para acelerar el desarrollo humano y lograr una verdadera seguridad.

La renovación debe ser simultánea en los tres pilares de la cooperación internacional. Fracasos en cualquiera de las tres áreas socavarán los fundamentos del progreso en el futuro. Contar con reglas más eficientes en el comercio internacional servirá de poco en países donde los conflictos armados obstaculizan las oportunidades de participar en el comercio. Acrecentar la asistencia sin incorporar reglas de comercio más justas arrojará resultados menos que óptimos. Asimismo, sin la perspectiva de mejorar el bienestar humano y erradicar la pobreza como resultado de la asistencia internacional y el comercio, la paz seguirá siendo frágil.

El semanario *Proceso* selecciona los hechos, tanto nacionales como extranjeros, más significativos para la realidad salvadoreña, a fin de analizar las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación. *Proceso* es una publicación del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

SUSCRIPCION ANUAL

Correo electrónico	\$ 50.00
El Salvador	
personal	\$ 15.00
correo	\$ 20.00
Centro América y Panamá	\$ 35.00
Norte y Sur América	\$ 65.00
Europa y otras regiones	\$ 85.00

Las suscripciones pueden realizarse en El Salvador, en la Oficina de Distribución de la UCA, o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad Centroamericana y dirigirse al Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, San Salvador, El Salvador, C.A. Para mayor información sobre *Proceso* marque (503) 2210-6671 o escribanos a cidai@cidai.uca.edu.sv